

---

*Venció las Inercias Antidemocráticas*

## **"Eppur, si Muove" el Plebiscito**

- ★ La Sociedad Puede Organizar sus Propias Comicios
- ★ Casi sin Recursos, Resultados Prontos y Exactos
- ★ Primera Votación con Cifras Confiables Desde 1911

LORENZO MEYER

331,180 votantes en el plebiscito capitalino del 21 de marzo no son muchos, más bien son pocos. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la movilización de ese electorado para opinar sobre la naturaleza del gobierno capitalino se hizo a pesar, y en contra, de la voluntad y recursos del Supremo Gobierno, entonces quizá no fueron tan pocos. Los que aquí insisten en nadar contra la corriente de las inercias antidemocráticas, bien pueden decir como se supone que dijo Galileo Galilei, cuando la inquisición le obligó a retractarse en 1633 de su idea de que la tierra giraba alrededor del sol: **Eppur, si muove**, (y, a pesar de todo, se mueve). En efecto, a pesar de la voluntad autoritaria dominante en el gobierno y en las élites económicas, religiosas y culturales, la sociedad mexicana se mueve hacia la democracia, pero con mucha lentitud.

SIGUE EN LA PAGINA DIEZ

Hace 29 años el politólogo español Juan Linz, hizo la definición clásica de los sistemas autoritarios, de esos que no son ni totalitarios ni democráticos, sino que se encuentran en un punto intermedio, como es el caso de México. Se trata de sistemas políticos donde el pluralismo existe, pero limitado. Pues bien, de acuerdo con esa definición, uno de los elementos que caracteriza a este tipo de sistemas es el de la desmovilización sistemática. O, dicho de otra manera: para sobrevivir, el autoritarismo necesita que la participación **motu proprio** de la sociedad en los asuntos políticos sea mínima. En el autoritarismo (y en esto hay coincidencia con el totalitarismo), la política es asunto sólo de los pocos, de las élites. Estas élites autoritarias, mediante cadenas clientelísticas, corporativa...

controlan a una sociedad que está formada más por súbditos que por ciudadanos. Es la incompatibilidad entre el autoritarismo dominante y cualquier iniciativa política que nazca de la sociedad, lo que explica en buena medida la reacción negativa de los aparatos y voceros del gobierno al plebiscito que tuvo lugar en la ciudad de México el domingo pasado. Las autoridades quieren decirle a la sociedad, y no que la sociedad les diga a ellas, cómo será el futuro gobierno de la capital.

Para evaluar a fondo lo ocurrido el 21 de marzo, conviene empezar por las cifras mismas. Como ya se sabe, en el plebiscito convocado por un puñado de miembros de la Asamblea de Representantes del DF —nueve al principio, ocho al final— votaron 331,180 capitalinos. Si se hubieran aceptado otros documentos de identidad además de las credenciales de elector o constancia de que se habían solicitado y la licencia de manejo, la cifra hubiera subido, aunque quizá no mucho. Al día siguiente de la votación, el periódico del gobierno, señaló en gran titular que la abstención había sido de 93.8%, es decir, ¡que el plebiscito fue un fracaso del tamaño de una catedral! En mayor o menor medida, esa idea fue repetida en titulares y columnas de otros diarios. Pero, ¿es realmente ésa la única perspectiva posible para interpretar las cifras? Creo que no.

Que fueron pocos los ca-

— Si duda, pero no tan pocos como sugieren los enemigos del plebiscito. En las últimas elecciones (las legislativas de 1991) —donde las autoridades locales y federales volcaron recursos mil veces superiores a los escasos de que dispusieron los organizadores del suceso del domingo pasado— en la ciudad de México se emitieron 3.279,450 votos válidos. Así pues, este 21 de marzo, una organización improvisada, prácticamente sin recursos, actuando en contra de la voluntad del Supremo Gobierno y de sus aliados y dependientes, basándose en trabajo voluntario —auténticamente ciudadano— y donativos, recogió una votación equivalente a 10.09% de la que hubo en la última votación capitalina. Si la teoría del profesor Linz es correcta, diez por ciento de espíritu ciudadano en el DF puede ser ya mucho para la tranquilidad de los espíritus autoritarios en la sede del gobierno nacional.

El Presidente no se dignó reaccionar oficialmente al plebiscito y el regente capitalino, con buen sentido, buscó no chocar abiertamente con las fuerzas que apoyaban la idea del plebiscito. Este último se reunió con los organizadores y les aseguró que el DDF no sería un obstáculo a su proyecto. El día 21, tras la conclusión de un acto público, Manuel Camacho se pronunció por un "sí que lleve, en un calendario pactado, a la formación de un gobierno propio de la ciudad de México que tenga sustento democrático". Esta fue la cara civilizada, "moderna", del poder, pero hubo la otra, la del "Senador No", Manuel Aguilera, y la del aparato oficial, que se lanzó a fondo contra quienes buscaban desnudar y poner en tela de juicio el orden autoritario vigente.

La reacción del aparato del poder a la iniciativa del puñado de asambleístas —una iniciativa que, obviamente, no daña a nadie ni a nada que no sea a la anti-democracia— se dio en dos tiempos y constituye un ejemplo perfecto de la mentalidad y **modus operandi** de un sistema autoritario flexible, como es el nuestro. El primer momento tuvo como objetivo aislar a los organizadores del plebiscito del grueso de la sociedad mexicana mediante un muro de silencio: cerrarles cualquier posibilidad de usar la televisión

— único medio informativo que llega a la gran mayoría— y hacer difícil el acceso a la radio y a la prensa y alentar ahí las reacciones negativas. Además, una parte de la pobre propaganda en favor del plebiscito —mantas, carteles y pintas— fue destruida, y en zonas completas de la ciudad no hubo ni un solo anuncio sobre el acontecimiento; cuando las mesas de votación aparecieron, los vecinos no sabían de que se trataba. La democracia busca poner al elector ante opciones, el autoritarismo busca evitar que las opciones aparezcan.

La segunda andanada contra el plebiscito fue **ex post facto**. Se trató de una ofensiva en todos los medios de difusión para sostener que: "Más de cinco millones de ciudadanos del Distrito Federal dijeron 'no' al plebiscito con signo perredista" (El Universal, 23 de marzo). El objetivo es mantener en el aislamiento a esa parte de la población —una minoría— en la que ya surgió la conciencia propia del ciudadano del resto, para que no contagie a la mayoría, donde por razones que tienen mucho que ver con la pobreza y falta de recursos, aún domina una actitud de marginalidad, de no participación, de subordinación aceptada.

En México, el periódico con información y análisis político, social y económico, no es realmente un medio masivo de comunicación; los lectores de periódicos como éste son una minoría, la minoría ilustrada. Para el grueso de los capitalinos —y de los mexicanos—, la única manera de adquirir información sobre el mundo que está más allá de su entorno inmediato, es la televisión. Y en relación al plebiscito, esa televisión fue muy bien empleada para crearle a la iniciativa un vacío casi total. La televisión mexicana ha mostrado ser la televisión perfecta para la "dictadura perfecta", que se nos dijo que somos.

Para propósitos políticos, el conjunto de la televisión mexicana —pública y privada— es una televisión estatal. En una declaración pública hecha a mediados de 1991, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, declaró: "Este consorcio televisivo se considera parte del sistema gubernamental y como tal apoya las campañas de los candidatos priístas.

— Lo he dicho públicamente, somos parte del sistema y el Presidente de la República es el jefe máximo que tenemos y estamos contentos de que así sea" (citado por José Antonio Crespo, "El contexto político de las elecciones de 1991" en **Las elecciones federales de 1991**, p.53). Frente a tal autodefinición, sobran los comentarios. Si tanto la televisión privada como la pública, están al servicio del Presidente, entonces resulta que en esa materia vivimos no en el sistema liberal que se pretende, sino en su opuesto: en un sistema estilo Albania antes de la caída del "socialismo real".

El chantaje tampoco faltó. El periódico del gobierno no tuvo ningún pudor en afirmar que si el Distrito Federal llegara a convertirse en un estado más de la Federación, entonces los capitalinos tendríamos que pagar con dinero contante y sonante nuestra osadía de rechazar la protección presidencial, pues tendríamos que pagar más por los servicios públicos y serían mayores los impuestos. Si hay un argumento elaborado bajo el punto de vista del servilismo, es éste.

Nuestro autoritarismo se distingue de otros que son o han sido, porque rara vez recurre a la fuerza en primera instancia, y menos ahora que busca el favor de la opinión norteamericana para que no se oponga a su proyecto del TLC. Sin embargo, el 21 de marzo el DDF no perdió la oportunidad de proyectar una leve sombra del lado oscuro del autoritarismo vía sus "observadores". Esos observadores —policías o personal de las delegaciones— se hicieron presentes en todas de las casillas y centros de organización del plebiscito a llevar un conteo propio... y a fotografiar a los participantes. Uno no puede menos que preguntarse, ¿para el álbum de quién tomaron las fotos de los integrantes de cada casilla?, ¿para el de Gobernación?, ¿para el de Seguridad Nacional?, ¿será el principio de un padrón de individuos con conciencia ciudadana, es decir, de los enemigos naturales del autoritarismo imperante?

Finalmente, lo mejor. Uno de los problemas centrales del largo camino de México hacia la democracia, es la credibilidad del proceso electoral. Bueno, en la ciudad de México, los integrantes de las 2,840

casillas que recogieron los votos de los 331,180 ciudadanos capitalinos que, pese a todo, se decidieron a emitir su opinión sobre un tema que las autoridades quieren que se trate sólo en eso que llaman "mesas de concertación", dejaron sentado un precedente en extremo importante: que puede haber procesos electorales en la ciudad más grande del orbe, y tenerse los resultados preliminares a la media noche, resultados que finalmente coinciden casi al milímetro con los definitivos. En efecto, un grupo de no profesionales, armados simplemente de buena fe, espíritu cívico, teléfonos y unas cuantas computadoras, pudo hacer lo que el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, fue incapaz de hacer: dar resultados pronto, exactos y no impugnables.

El gobierno que tiene un partido de Estado, ha insistido una y mil veces que no hay opción al control del proceso electoral por ese mismo gobierno que es juez y parte. Bueno, el primer plebiscito hecho por los ciudadanos demostró, en la práctica, que la sociedad mexicana está en perfecta posibilidad de organizar y vigilar por sí misma sus elecciones, y que los resultados así conseguidos son infinitamente más creíbles que los del IFE, Gobernación et. al.

El plebiscito del pasado día 21 fue un éxito aunque no sea más que por haber dejado comprobado de manera irrefutable, que en México sí es posible tener elecciones no controladas por el gobierno ni por los partidos sino por los ciudadanos. La decencia elemental y el espíritu cívico de los participantes en la jornada, aunados a cosas simples, tales como un par de mesas, una sombrilla, tres o cuatro sillas, boletas, cajones y marcadores, más un mínimo de elementos de comunicación modernos —teléfonos— y algunos aparatos de cómputo manejados por un puñado de técnicos como los de la Fundación Arturo Rosenbluth, pudieron hacer el domingo pasado algo que miles de millones de pesos manejados por el gobierno, IFES, COFIPES y demás siglas, no han podido hacer: dar a México su primera votación con resultado confiable desde aquella de 1911 en que se eligió a Francisco I. Madero. ¡Ya era tiempo!